



CONSTRUIR POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA EDUCACIÓN, EL EMPLEO Y LA SEGURIDAD

La Semana Social “40 años de Democracia y 10 años de Francisco” que se desarrolla en Mar del Plata con la organización de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, avanzó hoy con la realización de paneles, que abordaron respectivamente las temáticas de Economía y Trabajo por un lado, Justicia y Seguridad por otro, y Educación y Desarrollo, con coincidencias en los expositores respecto de la relevancia de construcción de políticas de Estado, basadas en la escucha, el diálogo y el compromiso con los más necesitados.

En el primer panel expusieron, Raquel “Kelly” Olmos, Ministra de Trabajo de la Nación, Roberto Feletti, ex Secretario de Comercio Interior de la Nación y Federico Pinedo, Diputado Nacional (MC) con la presencia de monseñor Dante Braida, Obispo de La Rioja, en las conclusiones. En el segundo evento participaron Zunilda Niremperger, Jueza Federal de Resistencia, Martín Arias Duval, ex Subsecretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Rodríguez, ex Viceministra de Justicia de la Nación, y Roberto Falcone, Juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Por la tarde disertaron Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación de Buenos Aires, Dante Sica, ex Ministro de Producción y Trabajo de la Nación y Nicolás Trotta, ex Ministro de Educación de la Nación. Las conclusiones quedaron a cargo de Mons. Pedro Laxague (Obispo de Zárate-Campana).

En su exposición, la titular de la cartera laboral rescató el legado de Francisco y llamó a trabajar en “la cultura del encuentro para construir puentes entre quienes pensamos y tenemos visiones distintas de la realidad”. En tal sentido reclamó “trabajar por un nuevo pacto democrático para garantizar un mejor futuro para nuestro pueblo”. Asimismo, advirtió que no deben admitirse los “discursos que se basan en desaparición del otro y su eliminación porque tiene una idea distinta. Me preocupa escuchar esos planteos en algunos dirigentes políticos”, subrayó. La ministra rescató la figura de Perón y el valor de los derechos sociales para la consolidación de la democracia, enfatizando la importancia de contar con un vigoroso movimiento sindical y de organizaciones para el debate paritario y las condiciones de trabajo.

El ex legislador por el PRO, Federico Pinedo rescató las mesas del encuentro convocadas oportunamente por el actual Papa Francisco y reclamó “razonar juntos para encontrar caminos en común. Hay que involucrarse y llevarlos a la práctica, ir una convivencia social que genere oportunidades para todos”. El dirigente señaló que “la situación social de la Argentina es urgente y requiere involucrarse en la realidad, no en las palabras” Destacó la inflación como “una catástrofe social que requiere un acuerdo sobre el estado entre los dirigentes y funcionarios del ámbito público”.

Roberto Feletti, por su parte, señaló que desde el restablecimiento de la democracia solo se ha recuperado empleo con el crecimiento económico y reclamó un compromiso activo con políticas de industrialización que son “la única posibilidad de perforar el piso de 6 puntos de

desocupación que se advierte tanto en 1983 como en la actualidad y con salarios dignos". Al efecto exhibió una lámina sobre el comportamiento de la producción y el empleo en los 40 años de la Argentina democrática, que mostró el abrupto crecimiento de la desocupación durante los períodos de neoliberalismo. El economista subrayó que "el principal problema que tiene la Argentina es el desempleo. Lo peor es no tener salario, porque el trabajo es también el gran organizador de la vida social", enfatizó.

A su turno, la jueza Nieremperger planteó la necesidad de "redefinir las formas de vinculación necesaria entre seguridad, derechos humanos y democracia, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos". Destacó que "las cárceles se encuentran abarrotadas por personas fungibles en su alta mayoría y seres atravesados por necesidades y en razón de la comisión de delitos, donde constituyen el hilo más débil del proceso delictual". Reclamó "mejorar el acceso a la justicia y avanzar contra la impunidad, no solo en los casos de crímenes de lesa humanidad sino también en otros casos que exigen justicia en otros ámbitos como la violencia de género o cometidos por actores públicos".

El juez Falcone enfatizó que "el fin del estado de bienestar no puede resolverse con leyes represivas, que no consideran los fundamentos sociales de tales problemáticas" y deploró el "populismo punitivista" que se afianza en recetas como la "tolerancia cero o la mano dura, que pretenden reemplazar con el derecho penal las falencias de la política pública". Reclamó por observar las reglas del debido proceso y evitar el uso de la prisión preventiva como una condena anticipada. El magistrado abogó por evitar un estado policial y la criminalización de la protesta social.

María Fernanda Rodríguez, ex Viceministra de Justicia de la Nación, reivindicó la figura de Alfonsín en la restitución del estado de derecho y en el impulso a los juicios por los crímenes de la dictadura militar. Asimismo destacó las experiencias de políticas de acceso a la justicia por parte de los sectores más vulnerables, enfatizando la necesidad de políticas que acerquen el derecho a quienes están más lejos de su ejercicio.

Martin Arias Duval, por su parte repasó la reforma del sistema policial bonaerense realizado bajo la gestión de León Arslanian en 2004 y los esfuerzos por crear mecanismos de profesionalización y control, aunque destacó que dichas políticas deben sostenerse en el tiempo para ser efectivas. Coincidió que "los problemas de seguridad no se resuelven con medidas represivas. No se puede confundir una doctrina de seguridad militar con una doctrina de seguridad democrática, que muchas veces termina atacando a quienes debería proteger. Se necesita construir una política pública que continúe más allá del signo y la identidad del funcionario de turno".

En el panel educativo, la ministra Soledad Acuña sostuvo que "sin un plan de desarrollo no hay plan educativo y reclamó un nuevo acuerdo como sociedad, donde la educación sea una prioridad". No votemos –pidió– solamente "en función de la inflación sino de la educación; necesitamos una revolución educativa con decisión política para que las cosas pasen. Soy optimista con el futuro de nuestra democracia; necesitamos ser conscientes de que no solo hay que estabilizar la economía sino potenciar la educación".

El ex ministro Nicolás Trotta exhibió indicadores sobre la problemática socio económica que condiciona el desempeño y la continuidad de los niños en el sistema educativo, "El principal condicionante del desarrollo de un ser humano o un niño está en la realidad social donde se inscribe y en este sentido necesitamos un estado que garantice y cuide a quienes están en situación de pobreza y vulnerabilidad." Subrayó la importancia del financiamiento educativo y de una formación única que dignifique el trabajo de los docentes.

Por su parte, Dante Sica, reconoció que en estos 40 años no generamos un sistema de desarrollo económico con inclusión. "Hemos hecho una opción como sociedad en derechos humanos y democracia, que hoy tenemos como políticas compartidas, pero no hemos tenido un correlato en lo económico. El economista señaló el peso de las corporaciones en el funcionamiento de la economía pero reclamó a la dirigencia política asumir la responsabilidad de regular y controlar. Dijo ser "optimista sobre el futuro de la Argentina, basado en el aprovechamiento de las condiciones internacionales y el impulso a los servicios basados en el conocimiento".

El ministro bonaerense Alberto Sileoni, cerró el panel sobre educación con una fuerte defensa de la "escuela pública como territorio de paz, amor a la patria y convivencia social", rescatando muchos de los avances logrados en universalización y extensión del trayecto escolar a partir de los cinco años y hasta la universidad. Destacó el logro de haber pasado en democracia de siete a catorce años de educación obligatoria y el rol de las universidades, que encabezan el índice de concurrencia estudiantil en la región latinoamericana. El funcionario celebró los avances en materia de inclusión educativa y reclamó que ese progreso tenga un correlato con la "inclusión en el conocimiento".